

# **Paro, subempleo, trabajo negro e informal en el sistema socio-económico del sur.**

**Enzo Mingione**  
Universidad de Messina

---

## 1. EL CONTEXTO SOCIAL DE LA EXPANSION DEL PARO JUVENIL MASIVO

---

La fuerte atenuación de las oleadas migratorias a partir de los años setenta, o más bien el fin de un largo periodo de emigración hacia estamentos de trabajo industriales, ha contribuido a modificar radicalmente el cuadro demográfico del sur. El impacto ha sido profundo ya que ha habido transformaciones paralelas en el comportamiento y las expectativas de los jóvenes y mujeres con un bajo nivel de escolaridad y específicamente de las mujeres a partir de una entrada masiva, aunque relativamente contenida con respecto a las zonas industrializadas, en el mercado de trabajo extra-agrícola. La reestructuración industrial no se ha debido solamente en sus orígenes a los flujos migratorios y al fin de un periodo de inversiones productivas sostenidas, si no que también ha habido una disminución contundente del número medio de puestos de trabajo y de la gran industria en el curso de los años ochenta (Rebeggiani, 1987). Esta parte del problema y aquella que emerge habitualmente en los análisis, otorga un rol de creciente importancia no obstante, a las condiciones de los servicios en un marco socio-económico, que cambia tanto su escala general como local. A nivel general, la transformación de los servicios de welfare, ya sean públicos, ya resulten de la eficaz interacción entre lo público y lo privado, se convierte en un factor crucial de innovación económica.

Se piensa en la difusión de los resultados de la investigación científica, en la importancia de los retos para las pequeñas empresas, también en ramas diversas en el nivel de la educación y de la formación profesional flexible más allá de las tradiciones de los sistemas escolásticos estandarizados y de la formación sobre el trabajo en las grandes empresas, o más bien, en las nuevas exigencias de los

sistemas sanitarios asistenciales. En este sentido, a una escala meridional (Ires Campania, 1987), resulta dramático la perspectiva que resulta entre las nuevas exigencias del sistema de servicios y la persistencia del tradicional asistencialismo y clientelismo que han penalizado duramente, no sólo las transformaciones innovadoras sino también las puras y simples inversiones de puesta al día. Dentro de las transformaciones que se han dado en el marco demográfico y ocupacional, para dar un ejemplo, la red ferroviaria se ha abandonado en lo que se refiere a cobertura de la red y a utilización, siendo cada vez más bajos, el sistema escolar soporta turnos dobles y triples y lo que imposibilita la experimentación, el sistema sanitario aprisionado por la magnitud de las maniobras clienterales, tanto internas, como las resultantes de las especulaciones privada, han generado círculos viciosos que han derivado en incrementar los niveles del desempleo juvenil, ya sea por la dificultad y la forma de buscar trabajo, ya sea por aceptar formas de ocupación precarias e irregulares en los servicios privados. Esto supone dos consecuencias negativas. De un lado, este terreno se demuestra particularmente fértil para la proliferación del crimen organizado. De otra parte, esta situación es contraria y hostil para llevar a cabo nuevas iniciativas empresariales, sean locales o provenientes del exterior, mayor particular aquellas innovaciones, medianas y pequeñas, más sensibles a los beneficios de un contexto social receptivo, rico en servicios y en oportunidades de acciones complementarias y más vulnerables al impacto negativo de la ineficiencia burocrática y de la intervención del crimen organizado (Becattini, 1989).

En definitiva, en un sistema ocupacional congelado en sus características negativas, como ha quedado sustancialmente, en los años ochenta, los jóvenes meridionales que se incorporan al mundo del trabajo son relativamente más numerosos que sus coetáneos septentrionales (en 1989, los jóvenes con menos de 14 años residentes en el sur que están en el mercado de trabajo suponen el 20,2% de la población residente en estas zonas frente al 12,6% del norte). Sufren la penalización de ineficiencia del sistema escolar y de los servicios sociales (en una relación inversamente proporcional, en general, al nivel de renta de la familia de la que proceden, ya que las familias acomodadas tienen capacidad de recurrir a los servicios privados, a los que se sitúan fuera de la zona y seleccionar los servicios locales de mejor calidad), el número de persona que salen del mercado de trabajo es menos que el número de los que se incorporan, por lo que las oportunidades laborales son peores que en el norte (de más de 60 años son el 17,3% de la población meridional contra al 23,2% de la del norte), deben afrontar un panorama ocupacional insuficiente, caracterizado por un elevado número de

trabajos informales, con una debilidad general de las garantías jurídicas que se concretizan en la perversión del reclutamiento y en las relaciones laborales clientelares, particularmente en el empleo público y en los servicios privados, dependiente de los responsables públicos y sustancialmente en la mayor irregularidad de todo el sistema ocupacional. Así, en el curso de los años ochenta, un aumento absoluto de la ocupación regular (estimada por el ISTAT en cerca de 200.000 puestos de trabajo de más al fin de 1986) en el sur que arrastra aumentos consistentes tanto en los servicios públicos como en los privados, no ha frenado ni la extensión del paro ni la ocupación irregular. Al contrario, en el centro-sur, la disminución de la presión demográfica y el fuerte envejecimiento paralelo de la población, no sólo han permitido absorber las tensiones derivadas de la reestructuración industrial (reflejadas en una disminución absoluta de las situaciones laborales regulares hasta 1986 de cerca de 130.000 personas sino que han abierto tensiones de demanda de trabajo insatisfecha, sobretudo en pequeñas empresas industriales y terciarias, que ya hoy han optado por iniciar prácticas de trabajo regular para inmigrados (Campus 1991; Maciotti e Pugliese, 1991). Estas andaduras demográfico-ocupacionales divergentes podrían hacer pensar que estamos en las puertas de una vuelta a las migraciones internas.

Existe tal eventualidad pero, en las condiciones actuales, es remota. Los puestos de trabajo excedentes en el norte se destinan sobre todo a ocupar trabajadores masculinos o similar con una renta medio-baja lo que no permite que sean ocupados permanentemente por ciudadanos italiano debido a lo costosa que le resulta la vida relativamente. Los hombres jóvenes, para los que la baja escolaridad es un componente sustancial del paro juvenil meridional, la estrategia del ahorro forzoso en unas condiciones de vida extremadamente difíciles, tal y como hacen los inmigrantes, no constituye una alternativa plausible propiamente, porque no se sostienen en un proyecto de vida, en el que el retorno con los ahorros constituya un objetivo racional.

---

## 2. LOS PARADOS: VIEJOS Y NUEVOS PERFILES

---

Durante casi una veintena de años, entre la mitad de los años cincuenta y la de los años setenta, el sur ha estado caracterizado por un nivel relativamente elevado de paro crónico, variable entre el 8 y el 10% de la población activa. Este esquema resultaba poco sensible al ciclo industrial y económico en general ya que la gran mayoría de los parados estaba formada por hombres adultos,

jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción, que entraban y salían del trabajo. Más que las puras transformaciones sensibles de la demanda y de las oportunidades de trabajo local, centradas en la terciarización pública, en el ciclo de la construcción residencial especulativa y la descentralización de grandes complejos industriales, el regulador del sistema ocupacional meridional estaba constituido por el flujo migratorio constante y sostenido. Los ciclos diversos de la economía industrial externa modificaban los asentamientos y los caracteres de la emigración, pero continuaron impidiendo que se formase un considerable stock de jóvenes parados hacia el fin de los años setenta. Ya en 1977 la tasa de paro meridional resultaba ser de un 10%, contra una tasa media nacional no muy superior al 7% (Altaeri y Pugliese, 1990). En el curso de la veintena 1955-1975 se registran dos importantes variaciones en el paro meridional, pero queda en gran medida caracterizado por el subempleo en la construcción y la agricultura. El componente de albañil adquiere un relieve creciente; el sector de la construcción viene a ser el campo ocupacional industrial que prevalece en todas las regiones meridionales y caracterizándose por una gran importancia del trabajo precario (Sylos-Labini 1964 y 1976; Trigilia, 1978), mientras que en el resto de los países, se registran transformaciones a favor del empleo regular y continuado (Villa, 1986). En segundo lugar, el subempleo agrícola, y por tanto el paro recurrente con precedentes laborales en agricultura, comprende una cuota creciente de mujeres. Excepciones a la regla son Sicilia y Cerdeña donde la presencia femenina en la actividad agrícola queda costreñida. En el censo de 1981, las mujeres meridionales constituyen la mitad de todos los parados meridionales que habiendo trabajado antes se aferran a la agricultura.

En los años ochenta el efecto combinado del cambio de los flujos migratorios (prevalencia de los que vuelven a entrar sobre los que salen) y de la reestructuración industrial, cambian netamente el cuadro del paro. No solo crece de manera incontenible hasta superar en 1988 el nivel del 20% (20,7% en el 1988 contra el 7,7% del norte y el 21,1% contra el 7,4% respectivamente en 1989), sino que los que buscan trabajo y los jóvenes en general, prevalecen en el tradicional paro recurrente meridional. La concentración juvenil y de sujetos en busca de trabajo es más fuerte en el sur que en el resto del país, existiendo un auténtico síndrome de acumulación de stock de sujetos que permanecen por muchos años en el paro sin encontrar ninguna ocasión de trabajo. En 1989 en el metogismo el porcentaje de sujetos menores de 29 años en busca de trabajo sobre el total es del 70,5 (contra el 67,8 en el norte), el de los sujetos en busca de ocupación del 53,2



(contra el 43), la de los jóvenes menores de 29 años en busca de ocupación del 45,6 (contra el 39,5).

Las formas tradicionales de paro recurrente resultan redimensionadas dentro del perfil más amplio y diferenciado del paro actual. Se ha cambiado su significado socio-económico en un contexto laboral y social condicionado tanto por la reducción de los flujos migratorios, como por las profundas transformaciones productivas.

La construcción meridional, tras la saturación en los años sesenta de las grandes obras residenciales y de las obras públicas, atraviesa una fase en la que prevalece la pequeña obra residencial, mayormente abusiva, de rehabilitación, auto-construcción y edificación de segunda residencia en localidades turísticas (Ginatempo y Fera, 1985). Disminuye el número de obreros en precario, sujetos a «regulares» entradas y salidas entre trabajo y paro. Paralelamente aumentan los trabajadores autónomos, los perteneciente a las micro-empresas y los ocupados de forma irregular ocasionalmente para periodos breves, entre los cuales se dan un número difícil de cuantificar de jóvenes que transitan en la construcción sin dejar ninguna señal estadística. La trayectoria de vida del subempleo tradicional de la construcción estaba condicionada por los flujos migratorios, en el sentido de que para muchos, se trataba de un tránsito de pre-socialización urbana entre los orígenes agrícolas y el obrero de las grandes ciudades extranjeras o del norte. La progresiva reducción de los movimientos ocupacionales fuera del sector, también a nivel local, ha puesto en dificultades tanto a los adultos como a los jóvenes, particularmente a aquellos con bajos niveles de escolaridad y de especialización profesional para los que resulta imposible unirse en pequeñas empresas especializadas, que logran un volumen suficientemente continuado de empleados. Los nuevos itinerarios resultan particularmente penalizadores para los jóvenes varones que abandonan la escuela primaria, tras conseguir el título, se arriesgan a trabajar con ingresos muy bajos y en condiciones precarias durante algún tiempo en edad juvenil, para después entrar en una larga fase de paro cuando no pueden aceptar más las condiciones de trabajo, que les son ofrecidas a sus compañeros más jóvenes, a los trabajadores ocasionales en tránsito en el sector y, con mayor frecuencia, a los inmigrantes provenientes de países en vías de desarrollo (Calvanese y Pugliese, 1991).

Ya he indicado el hecho de que el paro recurrente crónico en agricultura se ha convertido en un fenómeno fundamentalmente femenino. En el centro de

la drástica disminución del trabajo agrícola, sobre todo autónomo, de un desarrollo fuertemente dual, condicionado por el asistencialismo (Bocella, 1982) y por las modernizaciones esporádicas debilitadas por la fuerte dependencia de los circuitos agro-alimentarios controlados desde el exterior (Mottura, 1990), las figuras de la jornalera y de la campesina, sub-ocupadas y amas de casa, son extremadamente resistentes. Las transformaciones de la gestión agrícola, el envejecimiento de la población y el abandono de las tierras menos productivas y el empleo creciente de trabajadores inmigrados, erosionan lentamente estos perfiles, ya que para las generaciones de mujeres meridionales, con un bajo nivel de escolaridad, no existen alternativas ocupacionales practicables en el campo, y, menos aún en la ciudad.

La masa de paro juvenil es en el sur un fenómeno nuevo con raíces antiguas. La tasa de paro juvenil ha sido relativamente baja hasta la segunda mitad de los años setenta no tanto porque los jóvenes encontrasen trabajo fácilmente en la zona, sino porque una cuota elevada de jóvenes que encontraba dificultades para trabajar emigraba. El desarrollo de industrias modernas débiles, concentrado en pocas áreas y en zonas de alta intensidad de capital, dependiente de centrales externas y con una baja inducción local, acompañada de una progresiva desaparición de las industrias locales, está hace tiempo, en los orígenes de los problemas actuales (Graziani 1977 y 1979). La crisis ocupacional se vuelve más seria a partir del hecho de que el fin de los flujos migratorios, coincide temporalmente con otras transformaciones sociales: el creciente ingreso de mujeres jóvenes diplomadas en el mercado de trabajo y una mayor selectividad de las expectativas ocupacionales dirigida a favorecer una fuerza de trabajo con un alto nivel de escolaridad, en un tejido socio-económico donde, a pesar de los persistentes problemas, la disponibilidad del gasto, las costumbres de consumo, el coste de la vida han crecido y cambiado, y expulsan progresivamente hacia toda una serie de itinerarios ocupacionales tradicionales en agricultura, en los servicios domésticos en la construcción precaria, en las industrias locales, que toda lleva a una serie de cambios para obtener trabajos de bajo ingreso, o bien, trabajos que tienen un perfil profesional poco precisa e incierto. Como ha demostrado el 'escaso' resultado de las medidas que han permitido el acceso directo a colocación en puestos públicos fuera del lugar de residencia, mediante la doble inscripción (Ley 56 de 1987), también el empleo público ejecutivo, en la esfera de los partidos con sede local, ha cesado de ser una alternativa práctica si se acompaña de sacrificios y de la renuncia que impone la movilidad territorial. De esta forma, ya para los que tienen más de quince años, el sistema ocupacional

meridional acumula un stock de jóvenes parados con un periodo de paro más o menos largo, considerándose el sistema ocupacional sobre una serie de «distorsiones» colaterales, que tienen un notable peso de estructuración sobre las identidades sociales meridionales: la estratificación de los puestos de trabajo, público y privados, con la consiguiente sustitución de la ligadura clientelar respecto a las cualificaciones profesionales, la devaluación de las cualificaciones profesionales regladas debido a la invasión de parte de los sujetos de más elevada escolarización, para esa demanda, también la fuerte exclusión de las mujeres de profesionales altamente femeninas (enfermeras y mecanógrafas, por ejemplo) y, por ello, un notable tránsito femenino por el paro para volver después al papel de amas de casa y, por último, la persistencia de una elevada cuota de amas de casa jóvenes.

En 1989 los sujetos meridionales entre 14 y 29 años en busca de trabajo son casi un millón doscientos mil y representan el 70,5% del total del paro meridional y el 41,7% de la nacional. El hecho de que tales cuotas tiendan a decrecer, mientras aumenta la concentración meridional del paro, induce racionalmente, a hacer la hipótesis de que, en muchas regiones meridionales, el síndrome del paro juvenil se extiende progresivamente a un número creciente de jóvenes de treinta años, que continúan encontrando notables dificultades de integración en el mundo del trabajo. Es necesario agregar que el nivel tan elevado de paro juvenil es controlado de hecho, por el fuerte desánimo que sufren muchas mujeres con bajo nivel de escolaridad, residentes en la ciudad, terminando por hacerse amas de casa, no solo por factores culturales, sino también, y sobre todo, por la casi total imposibilidad de encontrar un trabajo aceptable. Los jóvenes con título de la formación obligatoria que representan casi un tercio del paro juvenil del norte, son apenas el 22,6% del meridional. Simétricamente las diferencias en las tasas de amas de casa son astronómicas: 22,7% en el sur contra el 6,5% en el norte para la clase de edad entre el 14 y el 24 años, 43,9% contra el 26,5% para los que tienen entre 25 y 29 años. Resulta de esta manera un cuadro en el cual el paro juvenil meridional es menos femenino (52,4%) que el del centro-norte (62,8%) sin embargo, las desventajas de las mujeres meridionales son superiores debido a la fuerte incidencia que alcanzan las amas de casa pobres totalmente desanimadas del trabajo y por las muy elevadas tasas de desempleo (65,75% para el grupo de entre 14 y 24 años y el 46,1% para el grupo entre 25 y 29 años, contra el 27,6% y el 17,5% en el norte respectivamente) y también se debe al hecho de que en el grupo desaparecido de mujeres jóvenes ocupadas (cerca de 450.000 sobre poco más de dos millones setecientas mil mujeres residente de entre 14 y 29

años, para una tasa de ocupación de 16,7%, contra aquel del 42,85% en el norte) inciden fuertemente el subempleo agrícola en el campo y las labores inestables e infrapagadas en los servicios privados en la ciudad.

Los itinerarios, comportamientos y tipologías cualitativas de los jóvenes desempleados meridionales son difíciles de reconstruir, dada la ausencia de indicios que resultan al menos parcialmente generalizables; los dos grupos cuantitativamente más relevantes son los varones con bajo nivel de formación (con el diploma de primaria al menos) que representan cerca de un tercio de los parados y las mujeres diplomadas que representan poco menos de una cuarta parte del total.

Las altas tasas de desempleo de estos grupos reflejan una situación de permanencia permanente en el paro, solo interrumpida por el recurso al trabajo «negro» ocasional y no un proceso de entrada y salida del mercado de trabajo que favorezca la «experienciación».

Los jóvenes hombres con bajo nivel de escolaridad se perjudican por el bajo «turn-over» industrial, por las condiciones persistentemente críticas del trabajo en la construcción terciaria y por el hecho de ser expulsados de las políticas de trabajo, en general orientadas hacia estratos que tienen más altos niveles de escolaridad. En las áreas agrícolas la infraocupación estacional en agricultura, los trabajos precarios en construcción y en los servicios, y la fuerte incidencia de transferencias públicas (Bocella, 1982), no constituye ya una alternativa practicable pues falta la válvula de la emigración y la urbanización. La oferta juvenil de hombres, particularmente cuando han alcanzado la mayoría de edad, es penalizada tanto por la concurrencia femenina, como por la de los inmigrantes, componentes de la fuerza de trabajo que aceptan condiciones de precariedad y de ingreso inaceptables para los jóvenes varones adultos. En la ciudad la situación puede ser todavía más difícil, porque la mayoría de ocasiones de trabajo en el terciario privado y en la construcción resultan muy insuficientes respecto a la dimensión de las cohortes generacionales de oferta y, también por esta razón, se caracterizan por tener fuertes niveles de irregularidad, bajos niveles de seguridad y de profesionalidad. Así pues sobre las labores masculinas urbanas temporales (incluyendo la construcción) inciden de forma creciente la concurrencia de titulados que, mientras buscan un trabajo definitivo, aceptan trabajos mal remunerados e infraprofesionales (IRES material, 5, 1989). También inciden los muy jóvenes y los menores, y, por último los inmigrantes. Al mismo tiempo, el



trabajo en el sector terciario público que había ofertado un segmento ocupacional relevante durante toda la primera mitad de los años ochenta, resulta en los últimos años saturado y congelado. Así, mientras una mayoría de sujetos encuentran una notable dificultad durante un largo periodo (que para un número creciente de personas llega más allá de los treinta años antes de integrarse a un trabajo definitivo, una minoría relevante queda instalada para toda la vida en la rutina del trabajo irregular en la construcción y en los servicios privados, lo que comporta pobreza familiar y unas pésimas condiciones de habitabilidad, agravándose por un contexto urbano en el que disminuyen los servicios de welfare.

Las tituladas a su vez tienen dificultades, sobre todo, a causa de la concurrencia masculina que resulta social y políticamente privilegiada al obtener posiciones laborales más estables en el terciario público y privado. Es particularmente llamativo el hecho de que son las jóvenes tituladas las que tengan mayoría como usuarias de cursos de cualificación profesional, sin que después puedan beneficiarse de cualquier posibilidad de trabajo. Muchos de estos itinerarios femeninos concluyen en la condición de ama de casa, tras un largo periodo en el paro, frustrando completamente las expectativas creadas en largos años de estudio. El fenómeno continúa reflejándose en la menor tasa de escolaridad femenina en el sur, constituyendo un indicador bastante grave de la persistencia de la discriminación sexual, primero a través de la exclusión de la escuela y, después, a través de la exclusión del trabajo retribuido.

El elevado nivel del desempleo femenino con una formación medio-alta y el crecimiento del masculino no parecen todavía indicativos de una explosión del desempleo intelectual. Una elevada formación hace menos difícil encontrar un trabajo (Pugliese, 1989), la menor presencia de mujeres de baja formación está acompañada de altísimas tasas de paro y, como hemos dicho ya, constituye un indicador de fuerte desanimación y de la persistencia de condiciones que los obligan a ser amas de casa forzosas y pobres.

Dado que la adquisición de niveles más altos de formación refleja orígenes sociales más elevados, en un tejido social como el meridional, la formación por sí sola no explica las menores o mayores dificultades en la búsqueda de trabajo. Las relaciones sociales personales y familiares más ricas e intensas para los sujetos de origen social medio y alto juegan sin duda un papel decisivo. Este hecho indica un ulterior y grave fenómeno de discriminación: los jóvenes, y, sobre todo, los jóvenes de origen social modesto, para los cuales la asistencia a la escuela ha representado un sacrificio gravoso, resultan después penalizados por

tener unas relaciones familiares y amistosas más pobres con los que contar para encontrar un buen trabajo, en un contexto muy clientelista y condicionado por las «recomendaciones» que tienen los sujetos de origen social más elevado. Es más probable, por lo tanto, que las tituladas de origen social modesto, terminen en el casamiento sin haber tenido ocasión de obtener un trabajo duradero y que los titulados, terminen encontrando trabajos en los que están sub-empleados y poco seguros. También los efectos de las políticas laborales en vez de ser moderada a este respecto resultan selectivas a favor de la franja de desempleados con formación medio-alta y, de estos últimos especialmente favorecen a los sujetos de origen social más elevado. La ley 285 de 1977 sobre todo ha tenido el efecto de crear un notable número de trabajos adscritos a la administración pública para titulados o universitarios. La ley De Vito de 1986 ha tenido un impacto mucho más modesto en términos de puestos de trabajo creados (unos cuantos miles) y también más selectivo a favor de las personas que cuentan con relaciones familiares y de amistad en el mundo empresarial. El art. 23 de la ley financiera del 88, después prorrogado en años sucesivos, constituye actualmente la medida más importante a favor de los jóvenes desempleados meridionales (afectando a más de 100.000 en labores de utilidad social durante un tiempo determinado) se dirige sobre todo a proyectos que prevén la utilización de sujetos con formación medio-alta. Pero también en esos proyectos que prevén la utilización de jóvenes con el diploma obligatorio, viene dada la prioridad de comenzar por los jóvenes que tienen títulos de estudio superior (Agenzia per elimpiego della compagnia, 1989). Por otra parte; se puede hacer la hipótesis fácilmente de que sólo algunos sujetos con buenas relaciones sociales y una formación medio-alta consiguen atesorar la experiencia ambigua de los proyectos de utilidad social y transformarla en un verdadero y personal comienzo profesional. En fin, vale la pena recordar que la ley 79 de 1983 que ha instituido los contratos de formación-trabajo, solamente ha interesado a la franja mayoritaria de los jóvenes desempleados con título de estudios de la escuela obligatoria; ha sido poco utilizada en el Sur (Caroleo y Veneziano, 1988): los contratos que han llegado a buen término transformándose en contratos fijos han incidido bastante poco sobre la marea creciente del desempleo juvenil meridional.

---

### 3.- EL TRABAJO NEGRO E INFORMAL: DE AGRICULTURA Y CONSTRUCCION A LA INFORMALIZACION DE LOS SERVICIOS PRIVADOS

---

El nivel elevado de desempleo, sea juvenil o adulto, y el alto grado de irregularidad y precariedad del sistema ocupacional meridional son fenómenos

considerados conjuntamente porque se caracterizan por una fuerte interacción. Es necesario clarificar aún inmediatamente, que esta interacción no consiste aquí, más que en otro lugar (EEC, 1989), en el hecho de que los desempleados «totales» sean menos de los estimados, porque muchos trabajan irregularmente, aún cuando se declaran como desempleados. Los trabajos irregulares en medida reducida son metas de subsistencia para sujetos que estadísticamente aparecen individualizados como desempleados y la casi totalidad mantiene actividad ocupados, como primero o segundo trabajo, inmigrados, pensionistas y menores. También en los casos tradicionales en los cuales la irregularidad supone alternancia entre empleo precario en la construcción, estacional en agricultura y el desempleo, las publicaciones estadísticas sean tanto trimestral como en los censos ha distinguido siempre netamente las dos vertientes del perfil del subempleo. La interacción entre los dos fenómenos es debida al impacto de la fuerte y creciente presión del excedente de oferta de trabajo, en un tejido ocupacional débil, que permite la proliferación de perfiles irregulares y una caída vertical de todo el sistema regulador y de las garantías, también jurídicas, del trabajo, y de otro lado, del hecho de que un componente creciente de la oferta de trabajo, que parte de varones adultos y de titulados, pero que comprende también un número creciente de mujeres, no puede, por razones económicas y sociales, aceptar (en los casos en los cuales se consolidan los segundos trabajos o el empleo de menores o de inmigrantes está descartado aún cuando quisiesen) las condiciones del trabajo irregular. Se trata, por lo tanto de un círculo vicioso que es difícil romper.

En el sur continúan teniendo un peso consistente el subempleo agrícola y el trabajo precario en la construcción. El empleo en el sistema de las grandes industrias y en las pequeñas y medianas industrias más estables y dinámicas, que han aumentado hasta la segunda mitad de los años setenta, siguiendo a los procesos de descentralización industrial, incluye a poco más del 5% de los activos. También en este caso, se señalan sustanciosas caídas de las garantías jurídicas y económicas como contratos inexistentes, trabajadores fantasmas, fuertes irregularidades en los procesos de acceso, etc. En fin, el sur sufre de manera muy acentuada, respecto al resto del país, una falta de consolidación de los servicios de «welfare», que se refleja en una mayor presencia de ocupaciones irregulares en los servicios destinados a la venta (el 30% frente al 20% en el centro-norte), en un crecimiento más acentuado de las actividades irregulares en los últimos años (+32% en los ochenta y en 1986, parte a +27% en el centro-norte), y se refleja también en la persistencia de mujeres que se han visto

forzadas al matrimonio y a la pobreza, constituyendo este grupo un número importante de las mujeres casadas del sur, especialmente cuando se trata de mujeres que pertenecen a estratos del medio urbano de renta baja. Esta situación es expresión de los estrangulamientos debidos a la escasez de oportunidades de empleo, la falta paralelamente de desarrollo de los modernos servicios del welfare y la exigencia de garantizar la supervivencia de la familia a través de un alto grado de desarrollo del trabajo doméstico al no contar con el complemento de los servicios necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la familia (Randazzo, 1986). Vale la pena subrayar rápidamente que la presencia y el elevado crecimiento del trabajo irregular en el sector terciario privado es atribuible a los servicios tradicionales y al déficit del welfare, porque la parte atribuible a la innovación de los procesos de trabajo en los servicios avanzados es muy modesta respecto a la típica de las áreas metropolitanas más dinámicas del norte.

Según las estimaciones del ISTAT/Contabilidad Nacional (ver tabla 1) el total de unidades de trabajo irregular (2.3000.000 unidades) en 1986 en el sur, constituyen un tercio del total del trabajo y absorben la mitad del saldo ocupacional activo entre 1980 y 1986 (200.000 sobre 400.000). El saldo activo es el resultado algebraico de la disminución de más de 300.000 puestos de trabajo regulares en las industrias y la agricultura (-180.000 y -150.000 respectivamente) que se ve compensado por el crecimiento de diversas formas ocupacionales en el terciario: en primer lugar, por el trabajo autónomo en los servicios destinados a la venta (+260.000 la mayoría en ramas tradicionales, formado bajo la protección del sistema clientelar); en segundo lugar por las situaciones de trabajo irregular (+215.000); y, en fin, por el aumento del empleo público que proporcionalmente es más fuerte que el registrado en el norte (+140.000, es decir, el 12,2% de más frente al aumento inferior al 8% en el norte), incremento que sin embargo no ha sido acompañado por mejoras sustanciales de los servicios del welfare.

En el censo de 1981, la ocupación agrícola ha bajado a cerca de un millón trescientas mil personas, de los cuales más de la mitad son jornaleros que trabajan menos de 100 días al año (Pugliese, 1983), otra parte importante son administradores de exportaciones agrarias marginales y que consiguen sobrevivir gracias a pensiones, subsidios, remesas de parientes emigrados o del trabajo realizado fuera de la explotación por parte de miembros de la familia. La persistencia del subempleo agrícola no es el resultado de la maduración del sistema de rentas basadas en la pluriactividad, como sucede sobre todo en la agricultura rica de la tercera Italia, (Brusco, 1980 y 1986; Mottura, 1990) que si



bien se caracteriza en medida decreciente por formas de pluriactividad tradicional, los sub-empleados agrícolas son jóvenes, mujeres casadas, ancianos pensionistas y emigrantes. Según las más recientes estimaciones del ISTAT, la cuota de sub-empleados en la agricultura meridional ha crecido considerablemente en los años ochenta (menos de dos tercios en el 80 y casi tres cuartas parte en 1986) como efecto del estancamiento respecto a la sustancial disminución de trabajadores regulares. Estos datos confirman la hipótesis de que en el Mezzogiorno continúa una grave crisis agrícola que prevalece a los fenómenos esporádicos de la innovación. Los trabajadores regulares están penalizados bien por la política desfavorable a los productos mediterráneos de la CEE, bien, por su integración dependiente en el sistema nacional e internacional del «agro-business» (Mottura 1990, Mottura y Mingione 1989), bien por las características que continúan caracterizando el sistema de los servicios económicos y del welfare en el sur. Este último factor tiene una gran importancia en la desincentivación de iniciativas experimentales y en la permanencia de jóvenes con formación media-alta en la empresa agrícola y también porque no permite que se establezcan posibilidades laborales complementarias transversales, que han sido una de las razones para que estos agricultores jóvenes se den en la tercera Italia.

De un lado, se tienen experimentos esporádicos y débiles, y, del otro, la transformación de la agricultura marginal está caracterizada por un envejecimiento y la expulsión de los trabajadores más regulares y la presencia de un fuerte peso de trabajadores sub-empleados en tránsito en la estructura productiva agrícola, como las mujeres jóvenes en espera de matrimonio y los inmigrantes. Para estas condiciones, es obvio, que la agricultura meridional muestra una escasa capacidad de absorberlos establemente, tampoco a las franjas limitadas de nuevos tipos ocupacionales en sustitución de las franjas bastante más grandes de trabajadores regulares, que por edad y otras razones, abandonan el trabajo agrícola.

Si tomamos los datos de censo relativos al trabajo en las industrias manufactureras, este se ha quedado casi igual entre 1971 y 1981. Pero su articulación interna ha cambiado, en lo que se refiere a las categorías de trabajadores, y a las ramas industriales. Disminuye mucho la diferencia observada entre los valores registrados en los dos censos de población y de industria (diferencia que es utilizada para estimar el trabajo precario). Resulta así que aumentan en el decenio los trabajadores regulares en las industrias, con más de

10 puntos, en particular constituye el efecto final de los procesos de descentralización de la mediana-gran industria externa. No hay señales de vitalidad de la empresa manufacturera local en aquellos sectores que han sido protagonistas de la industrialización difusa, como ropa, textil y calzado. Los datos del censo de población denuncian el hecho que la división tradicional de la industria manufacturera meridional ha perdido en los años setenta casi 130 mil adeptos, poco más o menos que un quinto. Sucesivamente, la fuerte disminución de trabajadores autónomos regulares, hace pesimista a quien lee los datos de las cámaras de comercio (D'Antonio 1989) o quien ve en algunas experiencias locales un indicador de despegue de la empresa innovadora a gran escala.

A partir de la investigación específica sobre el trabajo irregular, como la de Lignori y Veneziano (1986, 1987) sobre aspectos del fin de trabajo irregular en la zona metropolitana de Nápoles se descubre la importancia del trabajo irregular para el trabajo productivo en algunas ramas industriales, en el caso napolitano el calzado y la ropa (véase también Pugliese, 1985, Amin 1989). Los resultados de la investigación confirman la hipótesis de que el número de trabajadores manufactureros irregulares es más elevado del que hoy se estima y que las condiciones de irregularidad laboral (ocasionalidad, eventualidad, salarios muy bajos) se están convirtiendo cada vez más complicados. A las formas de irregularidad de las industrias tradicionales, se agregan la descentralización de los trabajadores a domicilio y el de sub-empleados de parte de las grandes industrias de ropa, junto a una floreciente manufactura oculta de productos textiles firmados falsificados.

Los datos de la serie histórica ISTAT/Contabilidad Nacional desglosados por regiones sobre el trabajo irregular en los años ochenta, son difíciles de interpretar se refieren al total del sector industrial, incluyendo construcción, y a la «unidad laboral standard» y no a los trabajadores del sector. Mientras una unidad laboral standard regular en general coincide con un trabajador, una unidad irregular comprende un número variable de trabajadores según la duración e intensidad del trabajo. Se pueden hacer algunas observaciones. Esta estimación registra de 1980 a 1986 un descenso muy leve, inferior al 2%. También por esta tendencia, el trabajo irregular industrial está concentrado para más del 60% en el sur, concentración que podría ser todavía más fuerte en términos del número de trabajadores afectados a partir de la hipótesis plausible de que el trabajo precario en el sur está más fragmentado y es menos continuado que en el norte, como efecto de una concurrencia más acentuada en este segmento del mercado de

trabajo. Las casi 600.000 unidades laborales irregulares en 1986 sobre un total de unidad industrial de 1.500.000 subtrae una cuota relativamente exigua de segundos trabajos que están concentrados en el terciario (Ragone. 1983, Reyneri, 1984, Chiarello, 1985), significan que al menos un trabajador de cada cuatro en la industria manufacturera es irregular y al menos dos de cada tres, están en la construcción. Esta situación se va deteriorando como efecto de la disminución mucho más consistente de los puestos regulares con respecto a los irregulares.

Los datos sugieren un escenario pesimista sobretodo porque ponen de manifiesto que la constitución de un núcleo suficientemente grande de clase obrera, establemente empleada en la industria moderna y la expansión de la base productiva industrial, no son condiciones importantes, para el flujo de procesos de estructuraciones sociales modernas y progresistas. Estas condiciones no se daban en el pasado ni siquiera era una tendencia. A partir de los datos más recientes, parece que un número muy limitado de la gran masa de jóvenes desempleados meridionales, tiene la posibilidad de encontrar un trabajo regular en la industria manufacturera, aunque hay que tener en consideración, que el cambio generacional en la manufactura moderna relativamente recientes es bastante limitado. El trabajo autónomo industrial presenta perspectivas aún más limitadas, dato ampliamente confirmado por el análisis del impacto de la ley De Vito. Aún hoy, la gran mayoría de los jóvenes que transitan o permanecen en el trabajo industrial lo hace en condiciones laborales irregulares.

Aún si se toma el puro y simple dato relativo del trabajo industrial en la diferencia entre el centro-norte y el sur es grande. Los ligados a la industria son un número y un porcentaje muy inferior, de trabajadores, teniendo en cuenta que el declive en valores absolutos del trabajo industrial, sea obviamente más acentuado en el norte. La parte que queda, en gran parte más importante del trabajo industrial meridional, queda en la construcción, que resulta más que el doble (casi el 40%) respecto a la del resto del país. En fin la cuota del trabajo irregular sobre el total del trabajo industrial agregado es cuatro veces más elevada, es decir, casi el 40% frente a menos del 10% en el norte. Y esto no es sólo el efecto de la construcción y de un trabajo de construcción más irregular que otro, también se debe tanto una fuerte concentración meridional del trabajo irregular manufacturero localizado ya en sectores y lugares tradicionales como en la industria del guante y del calzado en Nápoles, como a la nueva descen-

tralización de la industria a domicilio y a la manufacturas sumergidas de productos textiles falsificados.

La era del trabajo precario en la construcción como eje principal de la supervivencia de empleos urbanos de bajo ingreso está declinando a favor de otros tipos de trabajo, siempre irregulares, pero en el terciario. Es difícil identificar en profundidad las fisonomías del trabajo irregular en los servicios porque tales actividades resultan heterogéneas y respecto a quien trabaja (mujeres u hombres, jóvenes o ancianos, trabajadores escolarizados o menos, muchos o pocos cualificados), bien respecto al tipo de trabajo (del trabajo ocasional a otros más regulares, segundos trabajos, de la proporción importante de empleados públicos y de servicios privados, a la verdaderas y propias profesiones informales, como los vendedores ambulantes sin licencia o las trabajadoras a domicilio, no regularizadas).

Las estimaciones ISTAT/Contabilidad Nacional se establecen a casi 650.000 las unidades laborales standard irregulares en el terciario meridional en 1980, subiendo a más de 850.000 en 1986.

En este caso resulta difícil leer el dato en término de trabajadores que comprende porque la unidad afecta posiciones muy heterogéneas y una gran proporción de segunda actividad. Son, no obstante, posibles algunas consideraciones comparativas para confirmar la persistente y creciente diversidad entre el Norte y el Sur. Mientras que en el Norte se ha consolidado el empleo regular en el terciario privado, que representa casi el 60% del total, en el sur éste representa poco más del 45% del empleo terciario, porcentaje que tiende posteriormente a disminuir siguiendo el fuerte crecimiento entre los otros componentes, es decir el empleo público y el irregular. El primero en 1986 en el sur representa un tercio del empleo terciario frente a menos del 17% en el norte.

Más allá de los datos cuantitativos son importantes algunas consideraciones cualitativas. El tercio del trabajo privado meridional está en medida creciente caracterizado por formas de degeneración del tejido socio-ocupacional. La complementaria convivencia con un sector público poco eficiente y clientelar, una población polarizada en estratos con ingresos elevados y con gustos sofisticados, la debilidad y dependencia del exterior del mercado de los servicios a las empresas favorecen la proliferación de condiciones de trabajo extrañas a las lógicas del mercado junto a una innovación terciaria, de perfiles laborales poco



retribuidos, ocasionales e irregulares, bien en lo que se refiere al trabajo asalariado como al trabajo autónomo. Esta tendencia de la demanda de trabajo se encuentra con la presión de la oferta sobre-abundante de jóvenes y mujeres en busca del primer empleo, de amas de casa y de pensionistas y dobles trabajadores que tienen necesidad de complementar ingreso. Todo se resuelve en un tejido ocupacional muy segmentado donde no maduran ni las lógicas de mercado, ni los contextos de asociativismo profesional o de consorcio y cooperación entre pequeños trabajadores ni tampoco otros tipos de solidaridad.

En definitiva, en los años ochenta el declive numérico de las formas de trabajo irregular ha sido interrumpido por la combinación entre la capacidad de complementar el sub-empleo agrícola con el fuerte incremento del empleo irregular en el terciario privado. Es necesario también agregar que el trabajo irregular, sobre todo el del terciario, termina por afectar en medida creciente, a la actividad extremadamente ocasional el área de los desempleados (que no resulta claro totalmente en las estimaciones ISTART-Contabilidad Nacional): muchos jóvenes en busca de primer empleo, una parte del consistente ejército de amas de casa, un cierto número de estudiantes, menores, pensionistas e inmigrantes.

Esta última consideración sugiere alguna puntualización. Emerge la evidencia de que el mercado de trabajo informal está caracterizado en el sur por una concurrencia fatal del lado de la oferta de trabajo. Decir esto no significa negar la complejidad del problema y la posibilidad que el deterioro de ciertas condiciones laborales, no se ha considerado siempre menos aceptable por una parte de la oferta de trabajo local. Esta consideración vale sobretodo para algunos trabajos irregulares continuados «sucios» sin posibilidad de carrera, como el de camarera, de vendedor ambulante, trabajador de la construcción, de mozo de bodega, etc. Se puede fácilmente explicar la presencia de los inmigrantes y también la persistencia del reclutamiento ilegal de trabajadores menores de 14 años. De aquí se puede también confirmar la crítica contra un acercamiento demasiado fácil entre el desempleo y el trabajo informal.

Es obvio que los desempleados, donde y cuando es posible, aceptan hacer trabajos irregulares, provisionales y ocasionales, porque éstos últimos permiten acumular un ingreso, a veces indispensable para sobrevivir. Es también obvio que este hecho no termina con la condición de desempleado, es decir de individuo que busca un trabajo estable y continuado que permita utilizar la propia capacidad

laboral y de mantenerse sin ayuda de la familia de origen o el Estado. La mecanógrafa diplomada no deja de estar empleada cuando acepta ocasionalmente escribir una tesis doctoral a domicilio por unas miles de liras, así como el perito mecánico cuando ajusta el coche de un conocido, o el joven albañil cuando trabajado dos días para levantar un tabique, o la licenciada en Ciencias Políticas cuando suministra veinte cuestionarios para una firma de investigación de marketing. Queda aún el hecho de que incluso en el sur la fuerte concurrencia entre diversos componentes sociales por acaparar los trabajos ocasionales aceptables, significa que son muchos los afortunados que logran encontrar una cierta continuidad. Los trabajos irregulares no constituyen un tiempo laboral verdadero y propio, y son tan sólo una rotura durante una fase del ciclo de la vida, pero resultan también insuficientes incluso en este sentido cuando se alargan los tiempos de desempleo de los jóvenes o de las mujeres o hacen más difíciles las condiciones de vida de las amas de casa y de los pensionistas que viven en familia con ingresos bajos.

---

#### 4.- EL SISTEMA POLITICO Y LAS POLITICAS SOCIALES: PROYECTOS Y REALIDAD DE INTERVENCION

---

El hecho de que la estructura socio-laboral del sur sea fuertemente terciaria podría inducir a pensar en perspectivas de homogeneización a lo largo de las directrices pos-industriales seguidas por el Norte y por otros países europeos (De Masi, 1986). Pero los datos socio-laborales, para no hablar de los indicadores más sofisticados sobre la calidad y la eficiencia de los servicios, repudian ampliamente esta hipótesis. El terciario en el sur es dramáticamente diferente de las muchas posibles combinaciones entre un mínimo de servicios públicos eficientes y el crecimiento de los servicios privados innovadores tanto en los sectores de welfare como en aquellos sectores de servicios económicos a las empresas. En este terreno a medida que pasa el tiempo la diferencia entre la situación meridional y la de las zonas industrializadas aumenta, lo que prima dos círculos viciosos: la calidad de vida se deteriora como efecto de la ineficiencia del sistema global, pública y privada, de los servicios de welfare, la relativa debilidad de los servicios económicos hace siempre menos pausable la iniciativa económica y empresarial innovadora, local o descentrada, en agricultura, en la industria manufacturera o en los mismos servicios. Tener en cuenta la combinación entre estos dos circuitos, es totalmente importante hoy para discutir el posible impacto de cualquier política de desarrollo industrial, que sin ello difícilmente se puede

iniciar un trabajo que trate desde un punto de partida realista de afrontar la cuestión meridional. Falta por ver cuales son las fuerzas sociales interesadas en cambiar esta cuestión y como se pueda realizar esta operación en el ámbito de un tejido social fragmentado, donde la posibilidad de ligar la condición socio-laboral, con tipologías de comportamiento político y social tiene una posibilidad limitada, pues, al contrario, existe un predominio de prácticas individualistas dentro de una situación de gran competitividad, para capturar productos externos que no son ni de mercado ni de iniciativa profesional y por lo tanto, donde más que la solidaridad y las lealtades «modernas», cuentan los productos y las relaciones de los agregados clientelares y de las organizaciones criminales, productos que se colocan a favor de los estratos de mediadores y del boss (jefe), mientras que las familias de renta media y baja son las víctimas de un juego de progresiva depauperación y no cuenta la representación.

El otro lado de la problemática está constituido por las características del sistema político italiano y el papel que la maniobra clientelar juega en lograr el consenso. Este factor obviamente influye en las maniobras de política social y del trabajo a favor de las prestaciones que conservan y amplian la precariedad del sistema laboral y funcionan por paliativos más que por correctivos estratégicos a favor del desarrollo. Este tema sobrepasa los límites de esta intervención, pero como complemento del análisis sobre el síndrome socio-laboral me parece útil cualquier señal conclusiva sobre el impacto y sobre las perspectivas de las políticas económicas y del trabajo practicadas en los años ochenta y sobre las que se detectan hoy.

Hemos visto ya cómo partir de la ley 285 hasta el artículo 23 de la ley financiera 1988 las políticas laborales han tenido una eficacia modesta y controvertida y han privilegiado sistemáticamente a sujetos que pertenecen a orígenes sociales más elevados y con títulos medio-altos de estudio. Por otra parte el esfuerzo financiero, importante en estas políticas no ha contribuido al saneamiento del tejido socio-laboral y no ha diseñado nunca una estrategia de desarrollo, ni a lo más, una respuesta para terminar con la gravedad de los problemas, siendo limitada, contingente y a veces gestada de forma que permita ampliar el control de las redes «partidistas-clientelares» sobre un tejido social siempre más heterogéneo y fragmentado. Es particularmente vistosa la cuestión de cursos de recualificación profesional, relacionándola con el enorme volumen financiero (cerca de miles de miles) invertido anualmente por la comunidad Europea, el Estado y las Regiones. Aquí se contraponen la eficacia casi nula, en

términos de favorecer la entrada en el mercado de trabajo, respecto al impacto importante a favor de vías clientelares, a partir de las entidades que distribuyen los presupuestos y de los distintos tipos de categorías de los profesores.

El impacto más general y menos particularizado del artículo 23 no puede ser sobrevaluado. El carácter contingente y temporal y, sobre todo, el hecho que los proyectos no subyacen a ninguna forma de coordinación, por no hablar de programación, reduce a mínimos los términos ya sea de utilidad social, ya sea del efecto laboral. Desde este último punto de vista, la participación en los proyectos es para la mayoría de los directores, un tránsito que alivia el vivir del desempleo, sin permitir la construcción de perspectivas laborales duraderas. Constituye una señal preocupante el hecho de que los dos proyectos, el elaborado por el entonces Ministro de Trabajo Formica y el diseño de la ley de PCI para un ingreso mínimo a los jóvenes meridionales que intentaban reciclar la intervención del art. 23 en una estrategia más sólida y articulada, han caído en el más completo olvido.

La abolición en 1984 de las pensiones de invalidez INPS a los desocupados había abierto esperanzas sobre la posibilidad de convertir al menos un capítulo de gasto público hacia objetivos más sólidos y menos vulnerables con respecto al control clientelar. Pero también en este caso específico, la esperanza abierta ha sido muy desatendida al proliferar las pensiones distribuidas directamente por el Tesoro a través de las Prefecturas, con formas, todavía más clientelares y perversas respecto a los procedimientos INPS.

En lo que se refiere a las políticas de regulación de trabajo, el panorama es todavía más oscuro. El peso decreciente también en el sur de la gran industria y las formas del terciario heterogéneo ofrecen el flanco fácil a una mayor informalización que, al menos en los ochenta, ha resultado del todo incontrastada, hasta diseñar un terreno siempre más favorable a la penetración de las organizaciones criminales a niveles muy difusos (desde pequeños centros, hasta la invasión de regiones anteriormente consideradas exentas de este fenómeno como la Puglia) y elevados.

Para concluir quisiera subrayar como la reestructuración del tejido laboral meridional no es, obstáculo para las restricciones de la maniobra financiera. Los productos que hoy se dispersan en un millar de prestaciones poco eficaces para la meta fijada (del art. 23 de la financiera a fondos para la formación profesional, pasando por miles de capítulos de gasto del Estado central y de los entes locales)



podrían constituir una base más que suficiente para poner en marcha el proceso de resaneamiento, si hubiese un proyecto y una voluntad política. Esta cuestión resultaba ya clara para promotores del proyecto Formica. Tras la amplia degradación de la vida civil y del sistema laboral en el sur, no hay un complot consciente y perverso, si no más bien, una consolidada ausencia de intereses políticos que se desperdician en círculos viciosos de los que se ha hablado en este capítulo. Este, y no otros, es el obstáculo principal con respecto a políticas de desarrollo y resaneamiento laboral.

Tabla 1

**POSICIONES LABORALES ESTIMADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTABILIDAD NACIONAL DESAGREGADOS POR DEPENDIENTES Y AUTONOMOS, REGULARES E IRREGULARES EN LOS BLOQUES DE LA ECONOMIA. AÑO 1986.**

	TOT. VA. (000)	% REG. DIP.	REG. AUT.	IRR. DIP.	IRREG. AUT.
<b>AGRICULTURA</b>					
Centro Norte	1317.1	6.15	41.1	7.3	46.6
Sur	1205.8	3.9	22.7	42.6	30.8
<b>INDUSTRIA</b>					
Centro Norte	5318.6	74.5	15.0	6.1	4.4
Sur	1514.8	52.05	9.5	28.3	10.2
<b>SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA</b>					
Centro Norte	6563.8	46.7	32.8	8.9	11.6
Sur	2659.8	39.0	31.9	11.4	17.7
<b>SERVICIOS NO DESTINADOS A LA VENTA</b>					
	REGULARES		IRREGULARES		
	V.A. (000)	%	V.A.	%	
<b>Aumento 80-86:</b>					
Centro Norte	+ 176.8	+ 7.8	+ 85.1	+ 51.5	
Sur	+ 140.8	+ 12.2	+ 27.5	+ 53.2	

Fuente: ISTAT -Contabilidad Nacional, datos no publicados disgregados por regiones.

El ISTAT (1990, Pedulla y otros, 1987) ha publicado una serie agregada nacional para tipologías de trabajo regular e irregular que estiman los trabajadores para las posiciones laborales standard en 49 ramas. La desagregación regional no ha sido publicada y prevé sólo las posiciones laborales standard en los cuatro grandes campos de la economía (Agricultura, Industria, servicios destinados a la venta, servicios no destinados a la venta) y la distinción seca entre trabajo regular e irregular (ver también Mingione, 1990 y 1991). Se incluyen posiciones laborales imputadas al desempleo agrícola que no constituyen en sentido estricto un trabajo irregular, al menos desde el punto de vista estadístico, porque se trata de formas laborales declaradas y registradas como tales, si alguna vez sobrestimadas en cuanto incluidos de trabajadores que han pagado los contribuyentes para un número mínimo de días no trabajados para poder disfrutar del sistema previdencial especial para la agricultura.